



Asamblea General

PROVISIONAL

A/43/PV.60

30 de noviembre de 1988

ESPAÑOL

Cuadragésimo tercer período de sesiones

ASAMBLEA GENERAL

ACTA TAQUIGRAFICA PROVISIONAL DE LA 60a. SESION

Celebrada en la Sede, Nueva York,
el lunes 28 de noviembre de 1988, a las 10.00 horas

| | | |
|--------------------|------------------------------|-----------------|
| <u>Presidente:</u> | Sr. CAPUTO | (Argentina) |
| más tarde: | Sr. ESSY (Vicepresidente) | (Côte d'Ivoire) |
| más tarde: | Sr. CAPUTO (Presidente) | (Argentina) |

- Política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica [36] (continuación)

- a) Informe del Comité Especial contra el Apartheid
- b) Informe del Grupo Intergubernamental encargado de vigilar el abastecimiento y el transporte de petróleo y productos derivados a Sudáfrica
- c) Informes del Secretario General
- d) Informe de la Comisión Política Especial
- e) Proyectos de resolución

Este documento contiene la versión taquigráfica de los discursos pronunciados en español y de la interpretación de los demás discursos. El texto definitivo será reproducido en los Documentos Oficiales de la Asamblea General.

Las correcciones deben referirse solamente a los discursos originales y se enviarán firmadas por un miembro de la delegación interesada, e incorporadas en un ejemplar del acta, dentro del plazo de una semana, a la Jefa de la Sección de Edición de los Documentos Oficiales, Departamento de Servicios de Conferencias, 2 United Nations Plaza, oficina DC2-0750.

Se abre la sesión a las 10.35 horas.

TEMA 36 DEL PROGRAMA (continuación)

POLITICA DE APARTHEID DEL GOBIERNO DE SUDAFRICA

- a) INFORME DEL COMITE ESPECIAL CONTRA EL APARTHEID (A/43/22)
- b) INFORME DEL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL ENCARGADO DE VIGILAR EL ABASTECIMIENTO Y EL TRANSPORTE DE PETROLEO Y PRODUCTOS DERIVADOS A SUDAFRICA (A/43/44)
- c) INFORMES DEL SECRETARIO GENERAL (A/43/682, A/43/699, A/43/786)
- d) INFORME DE LA COMISION POLITICA ESPECIAL (A/43/802)
- e) PROYECTOS DE RESOLUCION (A/43/L.30, a A/43/L.38, A/43/L.41, A/43/L.42)

El PRESIDENTE: Ante todo desearía señalar a la atención de la Asamblea el informe de la Comisión Política Especial, publicado como documento A/43/802.

¿Puedo considerar que la Asamblea General toma nota de dicho informe?

Así queda acordado.

El PRESIDENTE: Me permito sugerir que la lista de oradores sobre el tema que estamos considerando esta mañana se cierre hoy, 28 de noviembre de 1988, a las 17.00 horas. Si no hay objeciones sobre este punto, así quedará decidido.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE: Tiene la palabra en primer lugar, el Presidente del Comité Especial contra el Apartheid Sr. Joseph Garba, de Nigeria, quien presentará el informe del Comité Especial.

Sr. GARBA (Nigeria), Presidente del Comité Especial contra el Apartheid (interpretación del inglés): Es, ciertamente, un honor para mí dirigirme a este augusto órgano al iniciar el debate sobre el tema 36 del programa, "Política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica".

La paradoja de la Sudáfrica de hoy fue muy bien definida por José Martí, quien en 1893 expresó en la forma más elocuente cuál era la esencia de la lucha de la Sudáfrica de hoy, cuando dijo que

"los hombres no tienen un derecho especial por el hecho de pertenecer a una raza u otra: la palabra hombre define todos los derechos."

Consideramos irónico que hace 95 años personas de aquella generación pudieran, en su limitada civilización, percibir y definir atinadamente un concepto con respecto al cual nuestra llamada civilización tiene dificultades para pronunciarse. Así, en la Sudáfrica de hoy una minoría blanca sigue aferrándose al poder, sojuzgando a la mayoría de la población de ese país: los negros. En violación de la Carta de las Naciones Unidas, el régimen sudafricano sigue aplicando continuamente su política de apartheid, negando así los derechos inalienables y políticos de los negros en el país donde nacieron.

La realidad política y socioeconómica de Sudáfrica y de la subregión del Africa meridional es actualmente rigurosa. Las recientes negociaciones en la subregión del Africa meridional dan motivos para una esperanza cautelosa en cuanto a la solución del conflicto bélico en Angola y el logro de la independencia de Namibia. No obstante, somos conscientes de las dificultades enormes que debe enfrentar todo acuerdo político relativo a una solución del conflicto. El hecho es que las modificaciones en la configuración de la política mundial han influido en el papel desempeñado por las Potencias mundiales en los acontecimientos actuales en la región, en especial con respecto a la independencia de Namibia. Estos cambios deberían constituir un importante recordatorio del efecto positivo que la acción internacional puede tener sobre los acontecimientos en Sudáfrica y en la región. Sin embargo, nos inquieta el hecho de que incluso la reciente manifestación de paz mundial no se haya extendido a la cuestión concreta y perturbadora del apartheid o no la haya tenido en cuenta.

Por esta razón, si bien Sudáfrica ha emprendido un proceso por el que procura poner término al conflicto fuera de sus fronteras, sigue en guerra con su propio pueblo. En ese contexto, ponemos seriamente en duda la viabilidad de toda solución pacífica en la región mientras el apartheid continúe en Sudáfrica. En la medida en que el régimen racista prosiga aplicando su política agresiva contra su pueblo, la estabilidad política y la paz de esa subregión se verán constantemente amenazadas.

Sudáfrica es hoy un Estado policial. La renovación del estado de emergencia y la virtual proscripción impuesta en febrero último a las organizaciones pacíficas y las personas contrarias al apartheid están destinadas a silenciar toda oposición al régimen. Las medidas draconianas impuestas a los medios de información nacionales extranjeros, que afectan incluso a un periódico afrikander de oposición, demuestran que el régimen persiste en sus esfuerzos para censurar drásticamente toda opinión contraria dentro del país y todos los intentos de la prensa para dar cuenta al mundo exterior de la repulsiva realidad interna de ese país. Lo que parece claro es que la promulgación de estas medidas represivas tenía el propósito de aplastar toda oposición a las presuntas "reformas" y a las elecciones municipales de alcance nacional celebradas en octubre pasado.

Como se sabe, esas elecciones formaban parte de las "reformas" propuestas por el régimen. Pero estas "reformas" no responden a las últimas exigencias de la población negra de ese país en cuanto al ejercicio de plenos derechos políticos en una Sudáfrica no fragmentada, democrática y no racista. Más bien responden a un solapado intento de atraer a sectores de la población negra a un propuesto órgano político consultivo, el Consejo Estatutario Nacional. En su gran mayoría, los negros han rechazado ese propuesto consejo, porque da una apariencia de que se comparte el poder que en realidad es ilusoria y sin fundamento. Los resultados de las recientes elecciones municipales de alcance nacional, en las que sólo votó el 1,3% de toda la población negra, sólo pueden ser un presagio y un recordatorio serio de que el Consejo Estatutario Nacional está destinado al fracaso. La Comisión de Derechos Humanos - un órgano creado recientemente para vigilar la aplicación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en Sudáfrica - emitió un informe antes de las elecciones, en el que detallaba los actos oficiales de intimidación, violencia y abusos destinados a coaccionar a los negros a que votaran, eliminando así toda oposición a las elecciones. El informe de la Comisión llegó a la conclusión de que las condiciones establecidas por la Declaración Universal de Derechos Humanos para la realización de elecciones auténticas no se habían cumplido. Nunca se puso en duda la ilegalidad de las elecciones y esta Asamblea General, en una resolución al respecto aprobada el mes pasado, lo reafirmó en términos muy claros e inequívocos.

Creemos que los acontecimientos recientes demuestran claramente el enfoque dual del régimen con respecto al conflicto en Sudáfrica: por un lado procura obligar a la mayoría negra a la sumisión y un mayor sometimiento y por el otro trata de atraerla, mediante una prestidigitación política, para que acepte las reformas falsas que dejarían intacto el poder de la minoría blanca. Los resultados de las elecciones demostraron que a pesar de la represión sistemática, la resistencia al régimen de apartheid continúa, encabezada por los movimientos de liberación nacional. Cuando algunas organizaciones anti-apartheid son proscriptas, otras ocupan su lugar. Esto es lo que ocurre hoy en Sudáfrica, donde los sindicatos, los grupos religiosos y de derechos humanos están a la vanguardia de la lucha por la liberación.

Trágicamente, la situación en ese país está cada vez más polarizada. Esto es un mal augurio para el futuro. No olvidemos que junto con la coacción y la violencia oficiales, los grupos extremistas paramilitares de derecha, cuyos vínculos con las fuerzas de seguridad sudafricanas no ofrecen dudas, en el último año han incrementado la violencia sistemática contra los opositores al apartheid dentro de Sudáfrica y el asesinato de dirigentes de la resistencia fuera de la región, incluso en capitales de naciones occidentales. Los bombardeos de los edificios Khotso y Kanya, donde estaban las oficinas de organizaciones religiosas y de oposición al apartheid, demuestran que incluso las iglesias y otras organizaciones religiosas no han quedado al margen. El aumento de los juicios políticos de activistas, bajo la acusación de traición, y las consiguientes sentencias de muerte impuestas son pruebas de que el régimen utiliza al poder judicial como un arma jurídica contra la oposición. La sentencia en el juicio Delmas es significativa y tiene consecuencias de largo alcance para la oposición al apartheid. El juicio no sólo declara ilegal a toda forma de oposición sino que también sienta un precedente ominoso: toda acción no violenta que pueda oponerse al régimen constituye traición y, por consiguiente, está sujeta a la pena de muerte. La conmutación de la sentencia de muerte a los Seis de Sharpeville, que todos celebramos, se produjo después de que el mundo entero se movilizara para salvar a los seis jóvenes condenados sobre la base de la doctrina del "propósito común". La conmutación de sus sentencias es notable por el hecho de que demuestra claramente el dilema de la Sudáfrica actual y la tragedia de ese país. Es destacable en el sentido de que para que Botha pudiera conmutar esas sentencias, tuvo que acallar a la extrema derecha perdonando a cuatro blancos que estaban condenados por asesinato. Este canje no sólo es desequilibrado sino que va en detrimento de todo lo favorable que el régimen puede querer que el mundo perciba. La pregunta, en realidad, es la siguiente: ¿las sentencias de muerte de los Seis de Sharpeville fueron conmutadas porque así correspondía o se las utilizó como un camino para salvar las vidas de cuatro blancos que eran culpables del asesinato de algunos negros?

Sudáfrica es hoy un país en guerra con su pueblo; es una sociedad en crisis. El tiempo se acaba mientras el apartheid continúa corroyendo a la sociedad sudafricana, tanto negra como blanca, hecho que incluso tiene consecuencias sobre el apoyo del Partido Nacional Afrikander. Es una verdad histórica que los

cimientos de una sociedad comienzan a debilitarse cuando pierde el apoyo de sus intelectuales y sus jóvenes. Más jóvenes blancos están abandonando el país porque no encuentran futuro en Sudáfrica. Pequeños sectores de los afrikanders están cada vez más inquietos y desencantados con el Partido Nacional y han emprendido un proceso de diálogo político con las fuerzas de oposición al apartheid dentro y fuera de Sudáfrica. En general, los grupos anti-apartheid, tanto negros como blancos, están tratando de encontrar una base común para enfrentar al régimen de apartheid y edificar la unidad en la acción.

¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad internacional ante estos acontecimientos? Debo admitir que esa respuesta ha estado lejos de lo que se necesitaba. Desde que esta Asamblea consideró por última vez la cuestión del apartheid, en noviembre de 1987, la presión sobre Sudáfrica, con pocas excepciones, ha provenido de fuentes no gubernamentales: bancos que encuentran cada vez más riesgoso efectuar préstamos a Sudáfrica, empresas que consideran que la inversión allí es muy peligrosa y casi no rentable y personas y organizaciones que continúan presionando por un retiro general de las inversiones. Aparte de las nuevas medidas adoptadas por los países nórdicos, sólo el Commonwealth - con excepción del Reino Unido - y el Congreso de los Estados Unidos han mantenido el impulso de la acción gubernamental contra Pretoria. Lamentablemente, la comunidad internacional no ha podido adoptar las medidas más importantes, las únicas capaces de dar al régimen sudafricano el mensaje inconfundible de que su política de apartheid no ha de ser tolerada porque constituye un anatema para los principios fundamentales de un mundo civilizado. Me refiero al hecho de que la comunidad internacional no haya impuesto sanciones obligatorias y globales contra Sudáfrica, en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

Es cierto que varios gobiernos han adoptado medidas contra Sudáfrica y, por lo tanto, han contribuido de modo importante a los esfuerzos conjuntos de la comunidad internacional en ese sentido. Los países nórdicos y los Estados Unidos han adoptado algunas medidas trascendentales. Sin embargo, lamento decir que las medidas adoptadas por la Comunidad Económica Europea son más bien débiles y en muchos casos parecerían estar destinadas a fines informativos más que a la eficacia. El Comité Especial lamenta profundamente que el Reino Unido, los Estados Unidos y la República Federal de Alemania continúen siendo los que apoyan económicamente a Sudáfrica y está muy preocupado por todo esto, aun cuando, ciertamente, el comercio entre los Estados Unidos y Sudáfrica se ha reducido en 1987 como consecuencia de la anti-apartheid Act de los Estados Unidos. Nuestro Comité observa con aprensión el hecho de que en 1987 el Japón asumiera la posición de principal asociado comercial de Sudáfrica al aumentar sustancialmente su comercio de importación y exportación con ese país. El Comité Especial confía en que la reducción del comercio que se registró en los primeros meses de 1988 sea una señal de que el Gobierno japonés tiene la intención de reducir sus vínculos económicos con Sudáfrica. El Comité reconoce los esfuerzos del Gobierno japonés por limitar sus relaciones comerciales con Sudáfrica y que el aumento de las cifras comerciales se debe en parte al aumento en valor del yen. Sin embargo, creemos que las autoridades japonesas tienen que hacer más para absolverse de culpa. Además, parece que algunos países tratan de conseguir ventajas llenando el vacío económico creado por las sanciones selectivas aplicadas por algunos Estados que han atendido el llamamiento de la comunidad internacional de aislar a Sudáfrica. A este respecto, el Comité Especial expresa su preocupación por el hecho de que la provincia de Taiwán y algunos otros países asiáticos también han aumentado durante el año transcurrido el volumen comercial con Sudáfrica.

El Comité Especial siente especial inquietud por el hecho de que la línea vital para la economía sudafricana, es decir, el crédito a corto plazo, la provean principalmente el Reino Unido, la República Federal de Alemania y Suiza. El Comité expresa su preocupación por los informes de que la República Federal de Alemania y algunos otros países han infringido recientemente el embargo de armas al vender a Sudáfrica equipos sensibles de uso militar. El Comité Especial sigue estrechamente la investigación emprendida por el Bundestag de la República Federal de Alemania, por medio de su Comité Parlamentario, en especial en cuanto a la venta de planos de

submarinos. Espera que el informe final del Comité Parlamentario, en contraste con el examen fiscal del Gobierno, que evidentemente dejó de hacerlo, ponga a la luz pública, en bien de todos, todos esos hechos.

Dado que el embargo de armas es un aspecto sobre el cual las Naciones Unidas han conseguido imponer sanciones obligatorias contra Sudáfrica, el Comité Especial observa con preocupación los intentos de algunos Estados Miembros de torpedear dicho embargo de armas, del que hasta ahora habían sido partes. Los responsables son los gobiernos de los países en cuestión, los cuales deben restablecer su imagen y prestigio investigando a fondo esas violaciones.

La situación que acabo de describir no da motivos de que sintamos confianza o tranquilidad. La situación en Sudáfrica continúa deteriorándose; si la comunidad internacional va a actuar en serio en lo tocante al desarrollo de los acontecimientos en Sudáfrica, necesita adoptar medidas decisivas contra el régimen. En este contexto, tengo el deber de presentar el informe del Comité Especial contra el Apartheid, contenido en el documento A/43/22. Quisiera señalar a la atención, entre otras cosas, la sección "Reseña de los acontecimientos en Sudáfrica", comprendida en los párrafos 5 a 60. En especial, quisiera señalar a la atención las conclusiones y recomendaciones que figuran en los párrafos 183 a 194. Asimismo, desearía señalar el anexo I, que contiene un informe sobre los acontecimientos recientes vinculados con las relaciones entre Sudáfrica e Israel, que el Comité Especial ha presentado cumpliendo con las directrices de este augusto órgano. Siento que es mi responsabilidad señalar que en el cumplimiento de nuestro mandato hemos encontrado que el Gobierno de Israel ha tomado algunas medidas positivas para redefinir sus relaciones con Sudáfrica. El Comité Especial, por lo tanto, ha tomado nota de las recientes medidas económicas así como de las medidas tomadas contra los deportistas que visitaron Sudáfrica. Sin embargo, entendemos que debe hacerse mucho más en la esfera de la colaboración militar.

El informe del Comité Especial contra el Apartheid llega a la conclusión de que lo más eficaz, aparte de la imposición de sanciones amplias y obligatorias, sería centrar las sanciones en las esferas fundamentales de la economía, especialmente en la prohibición de importar carbón y productos agrícolas, en lo tocante a la concesión de préstamos y créditos, la transferencia de tecnología y la prohibición de realizar vuelos directos a Sudáfrica y desde ese país. El embargo

obligatorio de petróleo sigue siendo todavía uno de los medios más poderosos de ejercer presión sobre el régimen racista. Tal como se ha expuesto, la vigilancia eficaz del embargo de armas es también un elemento sumamente importante de la campaña internacional contra el régimen de apartheid. En lo que respecta al alcance y la aplicación de sanciones, la Comunidad Económica Europea y el Japón han avanzado mucho menos que los países nórdicos y los Estados Unidos; por consiguiente, se les debe instar a que aumenten el nivel de sus sanciones y supriman los resquicios en la aplicación de las sanciones existentes.

También habría que considerar medidas para impedir que los países aprovecharan el vacío creado por otros Estados que han impuesto sanciones. Sobre esta cuestión, en el párrafo 60 del informe del Secretario General sobre la aplicación de las medidas nacionales adoptadas contra Sudáfrica, contenido en el documento A/43/786, - el cual he señalado a la atención de la Asamblea - se concluye que el debilitamiento de las sanciones es inherente en las situaciones en que éstas no se aplican universalmente o cuando no se han desarrollado todavía principios y procedimientos internacionalmente aceptados. El Comité Especial cree también que los Estados que decidan introducir sanciones deberían adoptar leyes nacionales para penar a quienes violan las sanciones, en lugar de formular sencillamente declaraciones políticas. Por último, la experiencia adquirida hasta ahora ha demostrado que es preciso fortalecer las sanciones aplicadas contra Sudáfrica, mejorar su coordinación, normalización y aplicación y crear un sistema más eficaz y centralizado de vigilancia y comunicación de la información.

En última instancia, la evolución de los acontecimientos en Sudáfrica determinará el curso de la historia en ese país. Sin embargo, no cabe duda de que la presión interna de la oposición anti-apartheid, combinada con una presión eficaz desde el exterior puede transformarse en una fuerza poderosa contra el apartheid. En este contexto, el efecto potencial de las medidas económicas contra Sudáfrica ha sido crucial en el llamamiento a la comunidad internacional para imponer más sanciones a ese país. Debe aumentarse constantemente el costo que debe soportar ese régimen para mantener el apartheid, aunque debería quedar en claro que la intención de la comunidad internacional no es - como a veces se argumenta solapadamente - dañar irreparablemente a la economía sudafricana; más bien, las sanciones deben dirigirse siempre a tener un efecto catalítico sobre los aspectos

internos e internacionales de la comunidad porque las sanciones pueden afectar a los sectores económicos que tienen influencia en el proceso de toma de decisiones políticas en ese país. En el mismo sentido, otros esfuerzos para aislar a Sudáfrica - tales como los esfuerzos en las esferas deportiva y cultural - pueden ejercer una presión paralela sobre la minoría blanca gobernante y, por lo tanto, también deben ser fortalecidos.

Hoy es cada vez más necesario ejercer presión económica y política contra el régimen. Los Estados Unidos, el Reino Unido, la República Federal de Alemania y el Japón deben ejercer su considerable poderío económico y político sobre Sudáfrica para ayudar a la mayoría del pueblo de ese país a derrotar al apartheid. Los intentos crecientes que realizan algunos países del Oriente Medio y del Africa para ayudar a Sudáfrica a evadir las sanciones deben ser expuestos y efectivamente condenados. No debe existir comercio con el régimen de apartheid. Ningún país debe beneficiarse de la corrupción del apartheid.

Por su parte, el Comité Especial continuará en los próximos años las actividades destinadas especialmente a influir no sólo sobre quienes toman decisiones sino también sobre los que forman la opinión pública a fin de robustecer la campaña internacional contra el régimen de apartheid. El Comité concentra cada vez más los esfuerzos, ahorrando recursos pero no escatimando esfuerzos. El seminario que realizamos este año en Lima con 17 periodistas de países latinoamericanos y del Caribe pretendió movilizar a los que forjan la opinión pública en un área en la que Pretoria ha tratado de infiltrarse y en algunos casos con éxito.

Nuestro Simposio en Atenas sobre cultura contra el apartheid, al que asistieron 36 renombradas personalidades del mundo de la cultura, dio al aislamiento cultural de Pretoria un ímpetu realista y urgente. En la misma forma, el Comité Especial planea organizar, en 1989, reuniones con parlamentarios, miembros de los medios de información, educadores y dirigentes sindicales.

Aun cuando hay signos de que está mejorando el clima político en la subregión meridional de Africa, evolución que complace al Comité Especial, la comunidad internacional debe concentrarse aún más en el deterioro constante de la situación interna de Sudáfrica donde el apartheid, que es el meollo del conflicto regional, sigue virtualmente intacto. Si el Sr. Botha persigue, como dice, un proceso de paz en la región, que inicie ese proceso dentro de Sudáfrica atendiendo las demandas de la población negra mayoritaria y sus aliados blancos. Déjesele que establezca las condiciones para la solución pacífica del conflicto en Sudáfrica mediante: primero el levantamiento del estado de emergencia, dejando en libertad, inmediatamente y sin condiciones, a Nelson Mandela y a todos los otros prisioneros y detenidos políticos, especialmente niños; levantar la prohibición que pesa sobre todas las organizaciones políticas y opositores del apartheid, y permitir que regresen con salvoconducto todos los exiliados políticos; segundo, retirar las tropas del régimen de los bantustanes y derogar las restricciones contra la libertad de prensa; y tercero, poner fin a la política de bantustanización y traslado por la fuerza de poblaciones, así como a las actividades militares y paramilitares dirigidas contra los países vecinos.

El Comité Especial contra el Apartheid se complace de la puesta en libertad, este fin de semana, de Zephania Mothopeng, dirigente del Congreso Panafricanista de Azania (PAC), y de Harry Gwala, miembro del Congreso Nacional Africano de Sudáfrica (ANC). Espera que este gesto humanitario sea también político y que sea seguido de una verdadera puesta en libertad de Nelson Mandela y de otros prisioneros políticos. Esta es la primera medida necesaria en un proceso de negociación para una solución pacífica del conflicto en ese país.

El poder último de cualquier sociedad reside en el pueblo. En Sudáfrica existe una minoría que piensa que la mayoría no está suficientemente ilustrada para ejercer este poder. La comunidad internacional no debe dar uso corriente ni credibilidad a esta suposición falaz porque esto crea una situación que no puede

ser aceptada en ninguna otra esfera de la comunidad internacional. Al presentar este informe del Comité Especial - asunto que se ha convertido en un rito anual - permítaseme decir que si bien el debate sobre el apartheid para algunos de nosotros puede ser una tarea que debe ser realizada durante el período de sesiones de la Asamblea General, para el resto de nosotros es un compromiso para encontrar ciertamente un final pacífico para la cuestión del odioso crimen del apartheid. Recordemos que la suerte de millones de negros y blancos sudafricanos depende de nuestras acciones y votos.

El Comité Especial es y continuará siendo sensible a los sentimientos de aquellos Estados Miembros que por una o por otra razón no apoyan nuestra labor y nuestro enfoque sobre esta cuestión. En cumplimiento de nuestro mandato continuamos tratando de conseguir la objetividad basada en una evaluación equitativa y no tendenciosa de las cuestiones tal como las percibimos. No tenemos la intención ni es nuestro mandato el poner en tela de juicio la soberanía o las políticas de los Estados Miembros, pero creo que sí es de nuestra responsabilidad informar a este órgano ilustre de tales políticas en tanto que se refieran a la Sudáfrica del apartheid. Así, en cumplimiento de nuestro mandato, hemos dado nombres cuando ha sido necesario hacerlo. Esto es inevitable, y no creo que tengamos que pedir disculpas por nuestras acciones. Si los Estados Miembros consideran que tienen que criticar nuestro informe, deben hacerlo en forma constructiva y de buena fe. Sin embargo, tienen que apreciar y aceptar que en su objeción a que se citen nombres no hay nada en ello que pueda equipararse a la brutalidad y violencia de la política de apartheid que el régimen racista impone a los sudafricanos. Por lo tanto, nuestra acción colectiva debe estar afirmada por nuestra franca percepción de la enorme carga impuesta sobre nosotros por el malévolo sistema de apartheid.

Sr. CHAGULA (República Unida de Tanzania), Relator del Grupo Intergubernamental encargado de vigilar el abastecimiento y el transporte de petróleo y productos derivados a Sudáfrica (interpretación del inglés): Tengo el honor de presentar el informe del Grupo Intergubernamental encargado de vigilar el abastecimiento y el transporte de petróleo y productos derivados a Sudáfrica (A/43/44). Este es el segundo informe a la Asamblea del Grupo Intergubernamental desde que éste fue creado en 1987.

Fue con gran ansiedad que a comienzos de 1987 los miembros del Grupo Intergubernamental aceptamos la invitación de unirnos a él, pues la tarea que voluntariamente aceptamos es única, difícil y delicada. La tarea del Grupo es única en el sentido de que ha sido la primera vez que la Asamblea General ha creado un órgano específico para vigilar el cumplimiento de una medida de sanciones no obligatorias. No tenemos precedentes ni experiencias de otros órganos semejantes para basarnos en ellos, y seguimos conscientes de que el empleo futuro de este enfoque dependerá de cuán eficazmente llevemos a cabo nuestro mandato.

Desde todo punto de vista, nuestra tarea es difícil. Nuestra labor es de naturaleza sumamente técnica, mucho más técnica de lo que quizás puedan pensar los que son ajenos a ella y más de lo que nosotros mismos esperábamos al principio de nuestro trabajo. Primero tuvimos que adquirir una comprensión técnica del problema y de sus diversos aspectos internacionales. No teníamos los recursos materiales para nuestra tarea por cuanto este Grupo se creó en momentos de crisis financiera de la Organización. Tampoco hubiera sido apropiado tratar de obtener esos recursos en aquel entonces, antes de que supiéramos que podíamos emplearlos de manera útil en la realización de nuestras tareas.

Además, el régimen de apartheid de Sudáfrica ha hecho todo lo posible para frustrar la vigilancia del exterior de sus suministros de petróleo, incluso al grado de requerir - y pagar extra por ello - secreto máximo a este respecto. Así, desde el comienzo mismo nos dimos cuenta de que nuestra tarea dependería de la cooperación de los gobiernos, especialmente de los Estados que exportan y transportan petróleo. Sin embargo, lo que hizo que nuestra tarea fuera más difícil fue el hecho de que previamente no se tenía casi ningún mecanismo fiable para la vigilancia del cumplimiento o la coordinación de los esfuerzos por hacer cumplir el embargo de petróleo contra Sudáfrica. Esta situación creó condiciones favorables para los transportistas y comerciantes de petróleo para desafiar tal embargo petrolero contra Sudáfrica con poco temor en cuanto a las consecuencias adversas, especialmente debido a que el embargo era voluntario.

Así como hace dos años empezamos nuestras labores con una sensación de ansiedad, podemos hablar hoy con un cierto alivio al presentar el segundo informe a la Asamblea General. Me parece que nuestros logros en estos dos primeros años han sido significativos e importantes y que si mantenemos el mismo impulso pronto podremos realmente avanzar en la vigilancia del suministro ilegal de petróleo a Sudáfrica, por cuanto concierne a la Asamblea General en relación con sus resoluciones 41/35 F y 41/23 F, a las que se hace referencia en nuestro informe.

En cuanto a los problemas técnicos, sólo puedo señalar que hemos adquirido experiencia con rapidez en la clasificación y evaluación de la voluminosa información sobre tráfico marítimo, documentación sobre descarga de petróleo, etc. Deseamos ampliar nuestro enfoque introduciendo nuevos métodos de análisis de datos el año próximo. Nos ha alentado el apoyo de los gobiernos en nuestra tarea y, en ciertos casos, la precisión de la información proporcionada por los gobiernos, elemento decisivo para nuestro análisis. También hemos apreciado mucho el apoyo indispensable que hemos venido recibiendo del Centro de las Naciones Unidas contra el Apartheid en nuestra tarea.

El informe del Grupo Intergubernamental encargado de vigilar el abastecimiento y el transporte de petróleo y productos derivados a Sudáfrica consiste en siete capítulos y tres anexos y proporciona un examen descriptivo y analítico de la labor realizada por el Grupo. Este año el informe es más amplio que en 1987. Se han agregado al informe nuevas secciones sobre inversión extranjera en la industria petrolera sudafricana, transferencia de tecnología y el papel de las compañías petroleras, difusión de información y la propuesta de audiencias en relación con el embargo de petróleo contra Sudáfrica. En el anexo I del informe se incluyen las respuestas de los gobiernos al cuestionario que enviamos a los Estados Miembros en relación con el suministro de petróleo y derivados a Sudáfrica y Namibia. Los dos anexos restantes se refieren a los casos de supuestas violaciones al embargo de petróleo.

En este contexto, permítaseme proporcionar algunos datos estadísticos. En 1987, nuestro primer año en funciones, se nos comunicaron 32 casos de presuntas violaciones que involucraban a 25 buques. Tres de esos casos se eliminaron sobre la base de la información proporcionada por los gobiernos interesados. En los restantes 29 casos, llegamos a la conclusión de que los envíos de petróleo a

Sudáfrica probablemente habían ocurrido, a menos que en el futuro surjan pruebas en contrario. La cooperación de los gobiernos en este ejercicio es fundamental.

En 1988, recibimos informes de 64 presuntas violaciones por embarques de petróleo a Sudáfrica provenientes del exterior en el que habrían participado 32 buques. Se retiraron siete denuncias debido a falta de información; en nueve casos, los gobiernos interesados proporcionaron documentación sobre la descarga de petróleo en puertos no sudafricanos, lo que nos llevó a eliminarlos de la lista. Los 48 casos restantes siguen siendo objeto de investigación por parte del Grupo. Este año se produjeron también cuatro nuevas denuncias de envíos de petróleo de Sudáfrica a Namibia. Uno de ellos fue confirmado y los otros tres siguen siendo objeto de investigación.

Nuestra tasa de detección y cobertura de las violaciones al embargo de petróleo impuesto contra Sudáfrica aumenta y estamos ocupándonos de un mayor número de casos en los que el mismo buque ha participado en más de un embarque a Sudáfrica.

Un objetivo que resulta razonable al Grupo en este momento es elevar la tasa de detección y cobertura creando con ello un desincentivo poderoso para quienes piensen participar en este tráfico. Los infractores pensarán dos veces al saber que existen grandes probabilidades de detección y que ésta los someterá a nuevas investigaciones en el futuro, inclusive en relación con otros buques de su flota, y no simplemente con el que fue detectado cuando efectuaba el envío de petróleo a Sudáfrica. Tal vez los fleteros piensen dos veces antes de comprometer buques o compañías que han sido identificados como infractores. Para ello, evidentemente debemos dar publicidad a los nombres, aunque quisiera asegurar a las delegaciones que nuestro enfoque es de vigilancia y no de venganza.

Dado que la vigilancia en nombre de la Asamblea es nuestra principal preocupación, hemos considerado especialmente importante aplicar con severidad criterios justos para evaluar los elementos de que disponemos y expresar nuestras conclusiones con gran cautela. Hemos subrayado que dar publicidad a estos casos

"... no implica en modo alguno un juicio crítico sobre los diversos Estados interesados ni sobre las empresas bajo su jurisdicción." (A/43/44, pág. 10, párr. 38)

Por esta razón, subrayamos que las "violaciones confirmadas" sólo significan para nosotros que no se han presentado suficientes pruebas para disipar la presunción de que el petróleo en cuestión probablemente haya sido transportado a Sudáfrica. Por la misma razón, hemos decidido aceptar la documentación sobre descarga de petróleo como refutación de las presuntas violaciones. Sin embargo, entre tanto, debemos recalcar que los gobiernos interesados deben examinar minuciosamente la autenticidad de la documentación presentada y estar más atentos a fin de evitar que las compañías petroleras y fleteras falsifiquen dicha documentación. Preferimos equivocarnos hacia el lado de la tolerancia a fin de asegurar que el alto grado de cooperación que tenemos con los gobiernos se mantenga.

Nuestra tarea es singular o, al menos, inusual también en otros aspectos. Por un lado, hemos recibido el mandato de la Asamblea General de vigilar el cumplimiento de las medidas que ha recomendado a sus Miembros. Pero, en lo que hace al transporte de petróleo crudo a Sudáfrica, no estamos frente a un comercio normal legítimo, sino ante un comercio "ilegal" de un producto que se desvía fraudulentamente a Sudáfrica contra el deseo expreso de productores y exportadores, pues ningún exportador o productor de petróleo crudo permite que el mismo se exporte a Sudáfrica. Los países exportadores de petróleo han hecho todo lo posible por desalentar estas exportaciones, llegando a prohibirlas y a calificarlas como delito. En la mayoría de los casos lo han hecho independientemente de las recomendaciones de la Asamblea General o con anterioridad a las mismas. En este sentido, el Grupo Intergubernamental simplemente coordina el cumplimiento de las medidas nacionales que ya han adoptado los Estados Miembros.

Lo que acabo de decir se aplica al petróleo crudo. Sin embargo, en algunos casos, los Estados inclusive han comenzado a tomar medidas similares respecto de los productos refinados del petróleo. En los últimos años, dos países con grandes flotas marítimas - Noruega y Dinamarca - han declarado ilegales los embarques de productos derivados del petróleo a Sudáfrica. Esperamos que en un futuro cercano otros Estados que de una u otra manera transportan o descargan petróleo entre productores y usuarios finales se sumen a la proscripción del abastecimiento de petróleo y derivados a Sudáfrica.

Además de ser justo, el Grupo Intergubernamental considera que su método también debe ser amplio y completo. Por esta razón nos hemos ocupado, aunque muy brevemente, de las cuestiones conexas de los intentos de Sudáfrica de mitigar los efectos del embargo de petróleo mediante la conversión de otros hidrocarburos en combustible, mediante la exploración y el almacenamiento de petróleo. Lo hemos hecho porque hay menos unanimidad en la comunidad internacional sobre esta cuestión que sobre la cuestión del abastecimiento de petróleo a Sudáfrica. Al señalar a los proveedores exteriores las tecnologías decisivas para estas actividades, esperamos que se comprenda mejor la situación. Nuestra opinión es que esto también debe prohibirse y que la comunidad internacional debe tomar medidas apropiadas en este sentido a través de la Asamblea General.

Quisiera informarles brevemente acerca de diversas comunicaciones que llegaron al Grupo Intergubernamental después de preparado el informe correspondiente a 1988. Estas comunicaciones se refieren a investigaciones que estamos realizando de casos de presuntas violaciones del embargo de petróleo a Sudáfrica y otras cuestiones conexas. Estas comunicaciones de los gobiernos serán examinadas por el Grupo lo antes posible y serán recogidas en su informe del año próximo. Sin embargo, quisiera ahora hacer una breve reseña de estas comunicaciones a título informativo.

Con fecha 7 de octubre de 1988 la Misión Permanente de Qatar envió una información adicional relativa al cuestionario que le habíamos enviado.

La Misión Permanente de la República Federal de Alemania, en una nota verbal de fecha 10 de octubre de 1988, decía lo siguiente:

"La 'Asociación de Armadores Alemanes' está enterada de la política del Gobierno Federal y de las decisiones adoptadas por los Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Europea el 10 de septiembre de 1985. No se realiza ningún envío de petróleo a Sudáfrica ni directamente ni en tránsito, desde puertos de la República Federal de Alemania ni por barcos que enarbolan su pabellón."

La Misión Permanente de los Emiratos Arabes Unidos envió una nota verbal, de fecha 31 de octubre de 1988, sobre el caso del barco Fidius que, entre otras cosas, decía:

"1. Se afirmó que el barco había llegado a Fujairah el 18 de junio de 1987 y había partido después de cinco días. En este contexto, debe saberse que no existe en Fujairah ni puerto petrolero ni ningún puerto para cargar ni transportar el petróleo. Por lo tanto, no pudo haberse cargado petróleo en Fujairah.

2. También se afirmó que el barco partió hacia el Irán y que después de partir hizo escala en uno o más puertos de Sudáfrica para entregar petróleo. Suponiendo que tal movimiento de parte de ese barco sea correcto, de ninguna manera se prueba ni indica que haya cargado petróleo en Fujairah ni en ninguno otro puerto de los Emiratos Arabes Unidos.

Para resumir, la denuncia de que el Fidius transportó petróleo desde Fujairah es falsa y carece de todo fundamento."

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Liechtenstein envió una nota verbal, con fecha 31 de octubre de 1988, relativa a los buques Berge Prince y Berge Princess, en la que, entre otras cosas, dice:

"El Ministerio de Relaciones Exteriores desea afirmar que el buque de propiedad de una compañía matriculada en Liechtenstein había sido fletado a casco desnudo a una empresa naviera noruega. Estos buques hicieron escala en puertos de Sudáfrica en relación con el comercio de petróleo. Tales escalas se realizaron de conformidad con la autorización que figura en el contrato de fletamento a casco desnudo, que les permite incurrir en 'comercio ilícito'. Mientras tanto, Noruega ha promulgado una ley que prohíbe realizar comercio de petróleo con Sudáfrica. Por lo tanto, los buques tendrán que cumplir esta ley."*

La Misión Permanente de Qatar, con fecha 9 de noviembre de 1988, envió notas verbales junto con documentación de descarga de los envíos de petróleo de los buques Berge Enterprice y Rafio, que fueron entregados en Singapur.

La Misión del Irán envió una nota verbal, de fecha 18 de noviembre de 1988, con una copia del certificado de descarga del buque Fidius que partió del Irán en junio de 1987 y entregó su carga de petróleo en Rotterdam, Países Bajos, el 16 de agosto de 1987.

* El Presidente vuelve a ocupar la Presidencia.

La Misión del Irán también envió otra nota verbal, de fecha 25 de noviembre de 1988, en la que negaba que los buques Berge Prince y Berge Princess hubieran participado en el abastecimiento de petróleo iraní a Sudáfrica.

Se recordará que el Grupo Intergubernamental siempre ha solicitado la presentación de certificados de descarga para probar que el envío de petróleo de que se tratara no haya sido descargado en puertos sudafricanos.

He tratado de reflejar fielmente las opiniones expresadas por diversos gobiernos después de preparado nuestro informe correspondiente a 1988, simplemente para asegurar a los Estados Miembros que el Grupo Intergubernamental considera muy cuidadosamente todas las comunicaciones que recibe de los gobiernos antes de compilar sus recomendaciones a esta Asamblea.

Antes de terminar, tengo el deber de expresar la deuda del Grupo Intergubernamental con el Centro contra el Apartheid y su Director, el Subsecretario General, Sr. Sotirious Mousouris, así como a sus colaboradores, en particular el Sr. Amer Aram, quien se desempeñó en forma muy competente como Secretario del Grupo durante todo el año, por su apoyo y colaboración.

Por último, en mi carácter de Relator el Grupo Intergubernamental, quisiera expresar mi agradecimiento al Presidente, al Vicepresidente y a todos los demás miembros del Grupo por su colaboración, que me ha permitido finalizar a tiempo este informe para presentarlo a la Asamblea General en el día de hoy, y que tengo la esperanza de que la Asamblea apruebe sin objeciones ni reservas.

Sr. MLLOJA (Albania) (interpretación del inglés): La política racial de Sudáfrica ha sido examinada en las Naciones Unidas en una forma u otra desde hace más de 40 años. La opinión internacional no ha dejado de denunciar firmemente durante todo este tiempo este sistema inhumano que se ha arraigado y ha institucionalizado en ese país las políticas raciales heredadas del siglo XIX. A pesar de los esfuerzos y de la lucha del pueblo azanio en pro de su libertad nacional y social en diversas formas, el apartheid continúa actuando como un sistema que oprime, explota y humilla no sólo al pueblo azanio sino también al pueblo namibiano, desafiando así a todo el continente africano. Por ello la comunidad internacional no puede guardar ni ha guardado silencio respecto a este régimen y su sistema, que se basa en la teoría racista de que la minoría blanca debe dirigir a la mayoría de color sólo porque ellos han nacido de color. Este régimen aborrecible, que se basa en la violencia, es la causa de la desestabilización y la tirantez que imperan en el Africa meridional. Prueba de esto es la grave situación del pueblo azanio, la ocupación de Namibia y los actos de agresión y subversión que ese régimen lleva a cabo sistemáticamente contra los países de la región.

En las actuales circunstancias, al igual que en el pasado, la suerte del pueblo de Azania ha sido motivo de preocupación. Independientemente de la rígida censura que los racistas han impuesto con la finalidad de borrar las fuentes de noticias en el país, la información que llega al mundo demuestra que el apartheid mata, arresta y chantajea al pueblo por la sencilla razón de que exige el goce de los derechos más elementales. De eso no se salvan ni los niños, mujeres y ancianos indefensos. Los manifestantes que protestan para conseguir mejores condiciones de vida y de trabajo, igualdad de derecho y justicia son suprimidos con toda ferocidad. Todo aspecto de la vida en Sudáfrica se caracteriza por la violencia y el terror, y la opresión en masa del pueblo figura en el programa de los racistas. Mediante las leyes draconianas impuestas en virtud del estado de emergencia, proclamado en el país desde hace mucho tiempo, los racistas realizan sus actos criminales. Con el pretexto del estado de emergencia, los llamados comités de seguridad se han convertido en un "gobierno en las sombras" de violencia y terror.

Pero este régimen horrendo, que no se limita a la opresión del pueblo de Azania sino que aspira a la hegemonía, ha convertido a toda la región del Africa meridional en un caldo de cultivo de la subversión y la destrucción. La ocupación ilegítima de Namibia y los constantes actos de subversión contra los países vecinos

son testimonio de la política de terrorismo estatal que persigue este régimen. Los Estados de la línea del frente, que son blanco directo de esas prácticas criminales, así como todos los demás Estados africanos, saben bien que Sudáfrica es la causa real de la grave situación y las complicaciones políticas, económicas y sociales que imperan en la región. Al mismo tiempo, saben que hay que oponerse a este desafío en forma solidaria, con determinación y sin compromisos. La República Popular Socialista de Albania brinda su absoluta solidaridad a esta lucha legítima.

En la historia de nuestra Organización, el régimen racista de Sudáfrica es probablemente el régimen dictatorial más condenado y denunciado por la opinión mundial. Esta condenación unánime es una demostración de la oposición a este régimen que ha desafiado constantemente las aspiraciones de los azanios y la solidaridad que le otorgan los otros pueblos. No cabe duda de que la fuente de este arrogante desafío no procede solamente de la fuerza del mecanismo represivo racista de la minoría blanca sino que se deriva del apoyo que este régimen obtiene de las grandes Potencias imperialistas, sobre todo de los Estados Unidos, que cuentan con diversos intereses en esta parte del continente.

Además, la situación de desestabilización que impera en el Africa meridional se complica aún más debido a la injerencia constante de las dos superpotencias - los Estados Unidos y la Unión Soviética - en servicio de sus intereses imperialistas. Cada una de ellas trata de explotar la situación en la forma que más le beneficie, tratando de abrir paso a sus ambiciones expansionistas. Por añadidura, sus regateos y acuerdos, que ellos consideran como dominio exclusivo propio para la solución de los conflictos regionales, en realidad tienden a dar carta blanca a sus políticas de diktat e injerencia en los asuntos internos de la región con el objetivo de reforzar sus posiciones políticas, económicas y militares. Pero resulta evidente para los pueblos de la región que la injerencia imperialista lleva aparejada graves consecuencias. La unidad de sus esfuerzos, deseos y voluntad deben ser determinantes para aliviar la tirantez y crear las circunstancias auténticas que conduzcan al logro de sus aspiraciones.

El curso de los acontecimientos en Azania y en toda el Africa meridional ha demostrado que el régimen racista no será erradicado simplemente con ruegos ni como resultado del regateo o las maquinaciones de las Potencias imperialistas sino mediante la lucha resuelta de los pueblos de Azania y Namibia y el apoyo solidario de los pueblos africanos y la opinión pública internacional.

La lucha que sostienen estos dos pueblos contra el apartheid es un conflicto social de grandes proporciones y no un conflicto entre las razas. Es una lucha entre el pueblo de Azania, por una parte, y el sistema de apartheid, por la otra. La supuesta solución mediante reformas no es más que una maniobra para entretener a las masas populares con el fin de perpetuar el dominio racista. Por eso opinamos que la cuestión de Azania no tiene que ver con las reformas constitucionales, puesto que el apartheid no puede reformarse, sino que se trata de erradicarlo y abolirlo de una vez por todas. Mediante la eliminación de la dominación y el saqueo racistas, neocolonialistas e imperialistas en esa parte de Africa, el pueblo obtendrá finalmente los derechos por los que han estado luchando durante tanto tiempo. Por consiguiente, los pueblos azanio y namibiano, así como todos los demás pueblos africanos, nunca se han transado por la demagogia de las reformas; por el contrario, se han opuesto a ellas y han combatido con las armas en la mano en pro de la libertad y la libre determinación. Esta lucha y, sobre todo, el espíritu de determinación demostrado por las masas populares, son la mejor garantía de que el régimen racista no tiene futuro en Sudáfrica.

La delegación albanesa reitera que nuestro pueblo, al igual que en el pasado, se opondrá resueltamente a todo tipo de discriminación racial. Denunciamos con firmeza la política racista de Sudáfrica y apoyamos sin reservas la justa lucha del pueblo de Azania y de los otros pueblos africanos en pro de su liberación nacional, en defensa de su libertad e independencia nacionales y contra la injerencia de las Potencias imperialistas y neocolonialistas. Confiamos en que gracias a su espíritu de sacrificio, coraje y firme voluntad de vivir libres en su propia patria, llegará un día no muy lejano en que el pueblo de Azania será dueño de su propio país, como lo son los demás pueblos africanos hermanos.

Sr. BADAWI (Egipto) (interpretación del árabe): El continente africano encara enormes desafíos que sólo serán superados mediante una voluntad inquebrantable y una indómita determinación. Nuestros pueblos del Africa no tienen otra opción que enfrentarse a esos desafíos y superar sus dificultades inherentes. El primero de estos retos y tal vez el más provocador es el deterioro de la situación en el del Africa meridional como consecuencia de la política racista y agresiva practicada por Sudáfrica contra los pueblos de la región.

El apartheid es una aterradora tragedia y un régimen inhumano basado en la represión, el derramamiento de sangre y el asesinato. Las Naciones Unidas y la comunidad internacional han condenado reiteradamente este crimen de lesa humanidad, y todos estamos convencidos de que debe combatírselo y que sus responsables deben ser castigados. Un régimen basado en la discriminación racial y en la negación de los derechos fundamentales de la abrumadora mayoría de la población está en flagrante contradicción con el espíritu y el texto de las religiones profesadas, así como en contra de los principios de la Carta de las Naciones Unidas que obligan a todos los Estados Miembros. Egipto sostiene una firme posición contra todas las formas de discriminación racial porque ello va en contra de los principios de libertad y de justicia contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Reitero que tenemos una firme posición de principio.

La minoría racista de Pretoria continúa aplicando la política de apartheid y sigue decidida a llevarla a cabo contra la abrumadora mayoría de la población, no obstante el carácter vergonzoso de esa política y la flagrante violación de los derechos humanos, de la Carta y de las resoluciones de las Naciones Unidas. Esa política, como se ha demostrado en el pasado, es la responsable de la escalada de violencia en un círculo vicioso no limitado a Sudáfrica ya que alcanza a toda la región toda vez que, como consecuencia de esa política, la mayoría oprimida se ve forzada a oponerse a una minoría que no solamente la ha privado de sus derechos humanos fundamentales y de una justa representación política sino que la ha hecho víctima de medidas terroristas de opresión y de represión. Por consiguiente, las cárceles están llenas de detenidos a los que se tortura y asesina.

La violencia creciente en Sudáfrica ha asumido proporciones sin precedentes. Las medidas de emergencia se aplican contra elementos de la resistencia nacional en un intento desesperado por aniquilar y suprimir esa resistencia intensificada mediante la cual las masas hacen frente a las políticas y a las maniobras racistas. Sin embargo, los terribles sufrimientos humanos que soporta el pueblo de Sudáfrica no han hecho más que redoblar la decisión de ese pueblo de liberarse de la opresión y de unirse con una extraordinaria conciencia política tras sus organizaciones. La comunidad internacional debiera robustecer su compromiso para

con la mayoría oprimida de Sudáfrica en su lucha contra la discriminación racial, del mismo modo que debiera redoblar y diversificar la presión que ejerce sobre Pretoria y unificar los esfuerzos para apoyar todas las tendencias que rechazan el apartheid a fin de llegar a la eliminación final de todas las prácticas inhumanas.

Desde hace más de 40 años las Naciones Unidas examina la cuestión de la discriminación racial en Sudáfrica. Es lamentable que las circunstancias hayan permitido que esa política odiosa perdurara durante más de cuatro decenios, o obstante la unanimidad de la comunidad internacional en condenar tales prácticas. A lo largo de todos esos años, la voz de las Naciones Unidas se ha expresado claramente en contra de la discriminación racial y el apartheid sobre la base de una lógica de aceptación universal en el sentido de que dichas políticas son sumamente peligrosas para la paz internacional.

Por esta razón, Egipto considera que debe hacerse un esfuerzo más grande - y hacerlo muy rápidamente - a fin de salvar a ese Estado destrozado por el racismo y aliviar los sufrimientos de la población, librando a la humanidad de la vergüenza que entraña el apartheid. Egipto considera asimismo que la comunidad internacional debe colaborar más eficazmente con el fin de eliminar la violencia en Sudáfrica y preparar la atmósfera para una solución pacífica y democrática. Un diálogo democrático entre todas las partes, sobre la base de la igualdad, es posible todavía y, en realidad, representa el medio más eficaz de alcanzar una solución pacífica para el conflicto racista existente en Sudáfrica.

Aunque estas ideas no son nuevas, estimamos que existe una necesidad urgente de entablar el diálogo entre los dirigentes de todos los estratos del pueblo de Sudáfrica, y que ello resulta cada vez más urgente. La vuelta a la paz en el Africa meridional sólo se logrará mediante la participación de la abrumadora mayoría de la población de esa región. Por lo tanto, creemos que el régimen de Pretoria debiera responder a todos los llamamientos en pro de la razón y la prudencia, entablando un diálogo democrático con la mayoría oprimida. Esto podría conducir a una solución pacífica que proteja los intereses de todas las partes.

Por ello, el Gobierno de Sudáfrica debiera abandonar todas las medidas adoptadas contra la resistencia pacífica y liberar a todos los detenidos políticos, lo cual constituye una medida esencial para poner fin a este conflicto. Pretoria se engaña si vive bajo la ilusión de que podrá poner fin a este problema adoptando obstinadamente medidas contra la resistencia o haciendo caso omiso de la justicia y

la causa de ese pueblo, procediendo a arrestar a sus dirigentes. Por el contrario, el diálogo es el único medio capaz de restablecer la paz en la región.

En esta ocasión, en nombre del pueblo de Egipto y de su Gobierno, deseo testimoniar nuestros mejores deseos al Comité Especial contra el Apartheid y al Embajador Garba, su Presidente, con motivo del vigésimo quinto aniversario de la creación de ese Comité. La comunidad internacional tiene cifradas enormes esperanzas en los esfuerzos de ese Comité encargado de denunciar las política racista de apartheid y de hacer que la opinión pública mundial tome conciencia de la naturaleza de ese régimen, movilizándola en la lucha contra el apartheid y la discriminación racial. Con gran dedicación y durante un cuarto de siglo, ese Comité ha emprendido esfuerzos encomiables a fin de desarrollar y coordinar un plan de acción destinado a poner fin al apartheid.

Saludamos asimismo la lucha del pueblo hermano de Sudáfrica y de su dirigente, Nelson Mandela, quien, con su lucha heroica, ha dado un ejemplo de firmeza y de fe en la justicia no obstante todas las dificultades, transformándose así en una leyenda única de nuestro tiempo.

Egipto siempre ha apoyado a los movimientos de liberación en Africa basándose en su fe en el futuro y en la coherencia de la historia. Nuestro país reitera su determinación de hacer todo lo posible por apoyar material, moral y políticamente a sus hermanos sudafricanos para que su lucha heroica se vea pronto coronada por el éxito.

Sr. HAMADNEH (Jordania) (interpretación del árabe): Tengo el honor de hacer uso de la palabra en nombre de los Estados miembros de la Organización de la Conferencia Islámica sobre el tema "Política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica". Esta política se considera como un crimen de lesa humanidad, una violación de la dignidad humana y una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.

Basándose en los principios que recogen del fondo de su historia, así como en sus firmes convicciones, los Estados islámicos condenan vigorosamente esta política odiosa y la rechazan en su totalidad. Dichos Estados siempre han afirmado su solidaridad con los pueblos de Sudáfrica en su valiente lucha que busca obligar al Gobierno racista de Sudáfrica a renunciar a su política de discriminación racial y les brinda su pleno apoyo. Los Estados miembros de la Organización de la Conferencia Islámica reafirmaron esta posición durante la 17a. Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores, de la cual mi país tuvo el honor de ser sede a fines de marzo de este año.

Desde su creación, las Naciones Unidas han intentado hacer frente a la política racista de Sudáfrica. La Organización ha aprobado a este respecto numerosas resoluciones que condenan esa política en la forma más vigorosa y piden su eliminación. Empero, el Gobierno de Sudáfrica sigue desafiando la voluntad de la comunidad internacional y violando los principios de las Naciones Unidas. Haciendo caso omiso de las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General sobre el tema, dicho Gobierno sigue aplicando sus medidas de represión destinadas a suprimir toda oposición nacional a su política de apartheid. Ha buscado, asimismo, exacerbar su guerra no declarada y comete actos de agresión contra los Estados de la línea del frente, dentro del marco de una política tendiente a desestabilizarlos y a arruinar sus economías para impedirles oponerse al apartheid y apoyar a los movimientos de resistencia nacionales.

De tanto en tanto, el Gobierno de Sudáfrica pretende aplicar propuestas que tilda de reformas, siendo la más reciente de esas propuestas las elecciones para los concejos municipales, boicoteadas por la mayoría de la población. Se trata de intentos desesperados - y fracasados - de disimular el rostro odioso del apartheid, pretendiendo hacerlo más viable y aceptable, habida cuenta de las presiones internas y exteriores. Al proceder de esta manera, el Gobierno de Sudáfrica intenta oponerse al curso de la historia, ignorando que la discriminación racial es un régimen falaz que debe desaparecer; constituye un crimen de lesa humanidad, cuyos autores deben ser castigados. Se trata, además, de una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

Algunos creyeron posible lograr que los dirigentes de Sudáfrica renunciaran voluntariamente a la política de apartheid, pero hoy y desde hace tiempo - después de haberse brindado a los dirigentes sudafricanos todas las oportunidades de hacerlo - se advierte que aquella esperanza era vana; dichos dirigentes parecen ahora empeñados solamente en consolidar su régimen racista y hacerlo más eficaz. El régimen considera que puede decidir el conflicto a su favor recurriendo a la fuerza y la violencia, sin escuchar las lecciones de la historia. Estamos convencidos de que - a pesar de la feroz agresión armada lanzada por dicho régimen en todos los frentes, internos y exteriores - las fuerzas nacionales continuarán movilizand o sus propias fuerzas y fortaleciendo sus actividades destinadas a continuar la lucha mientras sea necesario y sean cuales fueren los sacrificios que les exija la empresa de obtener su libertad y salvaguardar su dignidad.

Los principios y propósitos de las Naciones Unidas, como sabemos, representan la conciencia de la humanidad. Por ello, la Organización tiene una responsabilidad especial: salvar a la humanidad del oprobio y el flagelo que representa el apartheid. Frente a la continuación de la política racista y al hecho de que el Gobierno de Sudáfrica siga desafiando flagrantemente a la voluntad internacional, las Naciones Unidas deben adoptar medidas eficaces de disuasión e imponer sanciones globales y obligatorias para aislar a dicho Gobierno a nivel internacional y obligarlo a renunciar a su política de apartheid, con el fin de erradicarla totalmente sin más demoras. Habida cuenta de que la situación en Sudáfrica se está agravando al extremo de constituirse en una amenaza para la paz y la seguridad

internacionales, es claro que debemos condenar toda colaboración entre Sudáfrica y cualquier otro Estado. Exhortamos a todos los Estados a poner fin a la ayuda al Gobierno racista. Condenamos la colaboración entre Sudáfrica e Israel mencionada en el informe del Comité Especial contra el Apartheid (A/43/22), especialmente la cooperación en los planos militar y nuclear. Esa colaboración ha sobrepasado todos los límites en materia de tráfico de armas y fortalecimiento de las defensas del régimen sudafricano, llegando hasta el entrenamiento de las fuerzas de ese régimen para actuar en conflictos regionales, en detrimento de los Estados de la línea del frente y de quienes luchan por la libertad e independencia de Namibia. Es con justicia que apoyamos la lucha contra el apartheid en Sudáfrica y la resistencia empeñada por los países de la línea del frente ante las agresiones constantes del régimen de Sudáfrica. Exhortamos a todos los Estados a que respeten su integridad y garanticen la aplicación eficaz de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General relativas a la lucha contra el apartheid.

Sin este compromiso de parte de todos, la política de apartheid no llegará a su término. También exhortamos a todos los Estados a que den su apoyo moral y material al pueblo de Sudáfrica, para alentarle a continuar en su lucha, así como a los Estados de la línea del frente, para sostener su resistencia y aliviar sus sufrimientos.

Por último, agradecemos todos los esfuerzos del Comité Especial contra el Apartheid para cumplir su labor. Apreciamos también todos los esfuerzos desplegados por el Secretario General de las Naciones Unidas a fin de consolidar y coordinar las actividades en el plano internacional tendientes a resistir la política de apartheid y ponerle fin cuanto antes.

Sr. AL-SHAKAR (Bahrein) (interpretación del árabe): Deseo expresar mi agradecimiento y mi aprecio al Comité Especial contra el Apartheid por los valiosos esfuerzos que ha realizado para erradicar ese mal, que las Naciones Unidas y la comunidad internacional en conjunto han declarado crimen de lesa humanidad.

Las Naciones Unidas fueron creadas para defender los derechos del hombre, su valor humano, así como la dignidad de toda la humanidad. Se le ha confiado la preservación de estos derechos y libertades para toda la humanidad, sin consideraciones de raza, color, sexo o credo. El debate de la Asamblea General sobre la política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica coincide con el cuadragésimo aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tiene lugar en momentos en que los conceptos de libertad, igualdad, decencia y dignidad humana se han convertido en derechos y obligaciones y en objeto de diversos instrumentos y convenios internacionales. Estos conceptos ya no pueden reducirse, diluirse o negarse, y tampoco cederse, abandonarse o violarse.

Una paradoja fundamental de nuestro mundo de hoy, al acercarse el siglo XXI, es que el Gobierno de Sudáfrica sigue aplicando su política anacrónica de apartheid, que ha sido unánimemente declarada por la comunidad mundial como un crimen odioso contra la humanidad y una amenaza manifiesta a la paz y la seguridad internacionales.

El informe del Comité Especial contra el Apartheid, que figura en el documento A/43/22, pasa revista a toda la situación política y a la aplicación del apartheid en Sudáfrica, así como sus ramificaciones regionales e internacionales. En el informe también se examinan los acontecimientos y las relaciones entre los dos regímenes racistas, el de Sudáfrica y el de Israel. En el período que se examina

en el informe, el régimen de apartheid de Sudáfrica no ha mostrado ninguna señal de disposición a aceptar la creación de un sistema político y social democrático. Por el contrario, aún continúa la dominación de la minoría blanca sobre la mayoría negra. El régimen racista continúa negando los derechos fundamentales de millones de no blancos. Se sigue negando a la mayoría los derechos políticos, económicos, sociales y civiles más elementales, así como su derecho fundamental a la igualdad y la dignidad.

El Gobierno de Sudáfrica ha intensificado sus prácticas de apartheid contra la mayoría negra. Inclusive ha desarrollado nuevos métodos de represión, violando claramente las diversas resoluciones que las Naciones Unidas aprobaron desde 1952 condenando esta política dañina. El aspecto más grave de esta escalada es el empleo de grupos civiles paramilitares asesinos, lo que constituye un hecho peligroso en la estrategia que aplica el régimen de apartheid contra la oposición. La legislación laboral revisada, de 1987, está destinada a hacer aún más estricto el control de la población negra para asegurar su parálisis total y el pleno control sobre ella.

Es evidente que aún continúa la penosa tragedia de la mayoría negra del pueblo de Sudáfrica, como lo demuestra el informe, que exhibe detalles trágicos de las condiciones que reinan en el país y de sus consecuencias para la mayoría que vive bajo el régimen anacrónico, que utiliza todo tipo de prácticas arbitrarias y represivas. El régimen racista ha reanudado el estado de emergencia y de sitio y ha impuesto la censura a la prensa. También ha restringido toda actividad de oposición de los sindicatos y diversos grupos anti-apartheid.

El régimen racista sigue violando las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad que piden que se suspenda la aplicación de la pena de muerte contra los opositores activos al apartheid. Lo prueba la intención declarada del Gobierno de hacer cumplir la pena de muerte contra el activista Paul Tefo Setlaba.

En el período que se examina también se produjo un aumento del número de prisioneros y detenidos sin proceso, que incluye a hombres, mujeres y niños que todavía permanecen en prisiones y campamentos. Además, el combatiente por la libertad Nelson Mandela sigue en prisión, a pesar del empeoramiento de su salud. Mandela debió haber sido liberado por razones puramente humanitarias. Mi delegación se une a los llamamientos formulados al régimen de Sudáfrica para que libere en forma incondicional a Nelson Mandela y a otros prisioneros y detenidos políticos.

La historia ha demostrado que el apartheid no puede ser eliminado con reformas; que eso sólo es un sueño. Este régimen no puede ser reformado y debe ser eliminado, tal como lo piden diversas resoluciones de la Asamblea General. Por consiguiente, las llamadas reformas constitucionales, mediante los falsos consejos bicamerales y las recientes elecciones municipales, que son contrarias a las resoluciones de la Asamblea General - especialmente las resoluciones 38/11 y 43/13 - son simplemente cambios superficiales que la comunidad internacional ha rechazado categóricamente porque se oponen a los principios de la Carta y a las resoluciones de las Naciones Unidas. Lo que en verdad se necesita es la instauración de un sistema democrático, basado en la igualdad de derechos políticos y sociales para todos los ciudadanos. Esto sólo puede lograrse si el Gobierno sudafricano abraza los principios de la justicia y reconoce la inevitabilidad histórica del desmantelamiento del régimen de apartheid mediante consultas auténticas y sinceras con los verdaderos dirigentes africanos de Sudáfrica, a fin de instaurar el gobierno de la mayoría y crear un sistema al cual pertenezcan todos los ciudadanos, independientemente de su raza, su color o su credo. Esta es la única manera viable de establecer una verdadera sociedad democrática en Sudáfrica.

La constante política de Pretoria de aplastar la oposición al apartheid, con inclusión de los dirigentes religiosos, imponer la censura, recurrir a las detenciones y proscribir diversas actividades contrarias al apartheid nos demuestra que este régimen no está dispuesto a poner término a su política obsoleta sino que más bien tiene el propósito de consolidarla, en la práctica y en la legislación.

La situación de Sudáfrica se ha transformado en una pesadilla que tortura la conciencia de la comunidad internacional. Todos los años la Asamblea General es testigo de la imposición de mayores sufrimientos y miserias a la mayoría abrumadora de parte de quienes practican la aborrecible política de apartheid. Esta situación persiste porque la mayoría rechaza tal política y continúa luchando para poner fin a este régimen detestable.

Una lectura cuidadosa del informe del Comité Especial nos lleva a las siguientes conclusiones.

Primero, no hay ningún indicio fidedigno de que la política de apartheid pueda ser eliminada; por el contrario, vemos que el régimen recurre a una conducta tendiente a consolidar esta política por todos los medios posibles. Segundo, el continuo estado de emergencia en Sudáfrica refleja un incremento del deterioro de

la situación, que ha llevado al aumento de la resistencia popular para modificar este régimen, que es un anatema para todos los que defienden los valores humanos.

Tercero, si esta situación continúa deteriorándose, no puede excluirse la posibilidad de un baño de sangre en Sudáfrica. Tal acontecimiento ha de ser inevitable si se sigue aplicando la política de apartheid. Este es un hecho aterrador, especialmente si tenemos en cuenta la política arbitraria y represiva del régimen racista de Pretoria.

Cuarto, el comercio continuado y la cooperación en aumento en los planos económico y militar entre Sudáfrica e Israel y algunos otros Estados contribuyen a perpetuar el régimen de apartheid y a acrecentar el sufrimiento y agravar la tragedia del pueblo sudafricano. Ya se ha probado abundantemente que esto es el resultado de la estrecha colaboración entre los regímenes de Pretoria y de Tel Aviv, que ha sido condenada por las Naciones Unidas especialmente en lo que respecta a la esfera militar. Esta cooperación cada vez mayor no es nueva entre estos dos regímenes racista, que utilizan sistemáticamente la violencia y el terrorismo contra quienes se oponen a su política racista y de asentamientos coloniales. Los dos regímenes se burlan de las resoluciones de las Naciones Unidas y desdeñan los valores y los principios fundamentales contenidos en la Carta, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en cualquier otro instrumento internacional.

En vista de estas circunstancias, la comunidad internacional, encarnada en las Naciones Unidas, debe tomar medidas concretas para poner fin al régimen de apartheid y respaldar la lucha del pueblo sudafricano mediante la imposición de sanciones globales y obligatorias en virtud del Capítulo VII de la Carta, con el propósito de asegurar la terminación sin más demora de la política inhumana de apartheid y salvaguardar la paz y la estabilidad en el Africa meridional.

En diversas oportunidades Bahrein ha condenado la aborrecible política de apartheid, que es contraria a los valores y los ideales de la gloriosa sharia islámica, que se basa en la unidad del ser humano, la igualdad de todos los pueblos y la posibilidad de gozar de sus derechos fundamentales, independientemente de la raza, el sexo o la religión. Mi país declara una vez más que apoya todos los esfuerzos internacionales concertados tendientes a poner fin al régimen de apartheid, y establecer una sociedad democrática en la cual todos los ciudadanos puedan gozar de igualdad de derechos, sin discriminación en virtud de la raza, el color o el credo.

En este sentido, exhorto a la comunidad internacional a que continúe ayudando a los pueblos de Azania en su lucha legítima para poner fin al aborrecible régimen de apartheid y ejercer sus derechos legítimos a la libertad, la igualdad y la libre determinación.

Sr. WAN HUSSEIN (Malasia) (interpretación del inglés): Malasia está sumamente preocupada por la situación en Sudáfrica. La represión brutal de la población mayoritaria negra por el régimen racista ha continuado con creciente severidad. Los arrestos masivos, las detenciones y el traslado forzado de poblaciones reflejan la alarmante desesperación del régimen frente a la incesante lucha de la mayoría negra contra la política malvada e inhumana de apartheid.

Malasia ha expresado una y otra vez que el apartheid no puede ser reformado; que la única forma de conceder a la mayoría negra de Sudáfrica el ejercicio de su legítimo derecho a la libre determinación es destruir totalmente el sistema inhumano de racismo institucionalizado que representa el apartheid. Este odioso sistema debe ser abolido para que pueda lograrse la paz y la estabilidad en Sudáfrica y en la región del Africa Meridional.

El informe del Comité Especial contra el Apartheid y los informes del Secretario General dan descripciones completas y muy gráficas de la política y las prácticas represivas del maligno régimen de Pretoria contra la población mayoritaria negra así como de sus actos de agresión y desestabilización contra los Estados de la línea del frente. Mi delegación quisiera expresar su agradecimiento al Embajador Garba por su notable dirección del Comité Especial en la promoción de las medidas internacionales contra el apartheid.

La situación en deterioro que impera en Sudáfrica se debe a la intensificación de la represión y a la violencia patrocinada por el Estado contra toda forma de oposición al apartheid. El régimen racista sigue aplicando la doble política de reprimir brutalmente y de intentar atraer a los dirigentes negros hacia sus estructuras administrativas racialmente segregadas.

En febrero de este año el régimen racista de Pretoria restringió severamente las actividades de 17 organizaciones importantes contrarias al apartheid y de 18 bien conocidos militantes por la misma causa. La federación sindical más importante de Sudáfrica, la COSATU, también se vio restringida a realizar solamente actividades laborales. A esto siguió, en septiembre, la aprobación de la Amendment Act sobre relaciones laborales intentando así paralizar el movimiento laboral negro de Sudáfrica. También se instituyó la congelación en el sector público, la mayoría de cuyos empleados son negros, y esto trajo consecuencias adversas para los ya deteriorados niveles de vida de la población negra.

Estos actos de represión de la población mayoritaria se vieron facilitados por el restablecimiento del estado de emergencia que fue declarado en junio de este año. Este estado de emergencia fue declarado por primera vez en 1986 y tuvo como consecuencia que la policía, los organismos de seguridad y las fuerzas armadas actuaran más brutalmente contra la población negra. El régimen ha utilizado cada vez más grupos extremistas parapoliciales y paramilitares contra los oponentes al apartheid. Han continuado los traslados forzosos en masa de la población negra

como parte de los planes del régimen racista para consolidar los territorios patrios; se han promulgado en las zonas urbanas nuevas leyes para permitir a las autoridades imponer estrictamente la segregación racial en las zonas residenciales.

El régimen racista ha continuado realizando con constante rigor arrestos en masa, detenciones, juicios políticos y ejecuciones como medio de silenciar la oposición y privar de sus líderes a la resistencia. Como se expresó en el informe del Comité Especial

"Se sabe que entre el 1° de enero y el 14 de julio de 1988 fueron ejecutadas 81 personas. En mayo de 1988, había 274 personas en la lista de condenados a muerte cuyos nombres, en su mayoría, no se conocen. Actualmente hay por lo menos 70 prisioneros políticos en la lista de condenados a muerte."

(A/43/22, párr. 34)

Si bien hemos sentido alivio al conocer que se conmutó la sentencia sobre los Seis de Sharpeville y se liberó a Zephania Mothopeng, líder del Congreso Panafricanista de Azania (PAC), y a Harry Gwala, uno de los dirigentes del Congreso Nacional Africano de Sudáfrica (ANC), rechazamos la condenación reciente por los tribunales de cuatro dirigentes del Frente Democrático Unido so pretexto de que hablar y realizar demostraciones contra el apartheid constituye un delito de traición contra el Estado. A Nelson Mandela se le sigue negando su libertad así como a otros presos políticos que están en las cárceles sudafricanas. Debe continuar aplicándose la presión internacional para obligar al régimen racista a liberar inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos de Sudáfrica.

La represión brutal contra la resistencia al apartheid ha sido llevada a cabo también contra miembros del Congreso Nacional Africano que se hallan en el exterior. En marzo de este año, la representante del Congreso Nacional Africano en Francia, Suiza y Luxemburgo, Sra. Dulcie September, fue asesinada brutalmente. También se ha atentado contra la vida de otros representantes del Congreso Nacional Africano en Bélgica, así como contra otros que viven en Swazilandia, Zambia, Botswana y Zimbabwe, como parte de la campaña sistemática del régimen racista para eliminar a los dirigentes de esta organización. También, y cada vez más, la fuerza de seguridad y los grupos parapoliciales han perpetrado crímenes políticos contra los miembros del Frente Democrático Unido, del COSATU, y de la Azanian People's Organization (AZADO) que realizan actividades.

Paralelamente a estos actos brutales de violencia contra los oponentes al apartheid el régimen racista intenta que los dirigentes negros participen en sus estructuras administrativas racialmente segregadas con el fin de conferir legitimidad al régimen. Tales intentos de atraer a la población negra a esas estructuras oficiales comenzaron primeramente en 1963, pero el levantamiento y el boicoteo de la mayoría pudieron destruir el sistema de concejos municipales que se les impusiera. En octubre de este año, en su intento de restablecer las estructuras administrativas raciales y segregadas, el régimen realizó elecciones para concejos municipales.

Estas elecciones municipales fueron condenadas en términos inequívocos por la Asamblea General. No se trataba de una expresión democrática de libre elección por parte de personas libres sino de una farsa de proceso democrático que habría contribuido a fomentar la causa del gobierno de la mayoría en Sudáfrica. Evidentemente, esas elecciones constituían un engaño para dar la apariencia de que los negros participaban en la estructura administrativa racial del régimen. En verdad, estas elecciones no tienen legitimidad alguna por cuanto se basan en la Constitución de 1984, que fuera rechazada por los negros de Sudáfrica, y declaradas como nulas y sin valor por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad.

En realidad, los deberes y responsabilidades de los concejales municipales - como los designara el régimen racista - no satisfacían las necesidades de las comunidades locales por cuanto dichos concejales no tenían el poder ni los fondos necesarios para el mantenimiento y el desarrollo de los servicios vitales en sus comunidades segregadas. Los llamados concejales electos no fueron más que un intento del régimen por formar colegios para elegir 9 de los 15 representantes que cumplirían funciones en el Consejo Estatutario Nacional que el régimen espera que desempeñe un papel en la preparación de una nueva constitución para la mayoría negra de Sudáfrica. Sabemos que las elecciones municipales fueron un intento fraudulento de engañar a la comunidad internacional haciendo creer de que en Sudáfrica se estaba realizando un proceso de reforma política. El objetivo, en cambio, era simplemente arraigar aún más el aborrecible sistema de apartheid de Sudáfrica.

En su estrategia para perpetuar el apartheid, Pretoria también ha buscado la dominación regional. Sudáfrica y las fuerzas que la representan siguen cometiendo actos de agresión, de desestabilización y de terrorismo de estado contra Mozambique, Zambia, Zimbabwe, Botswana, Swazilandia, Namibia y, recientemente, Angola. Como informa el Comité Especial:

"Las pérdidas de vidas humanas han sido considerables y más de 2,5 millones de personas han sido desplazadas a los países que tienen fronteras con Sudáfrica. Se estima que el costo de la desestabilización regional desde 1980 es superior a los 27.000 millones de dólares y la cifra para el período comprendido entre 1985 y 1986 es de 15.000 millones de dólares."

(A/43/22, párr. 53)

Malasia ha instado reiteradamente a la imposición de sanciones amplias y obligatorias contra Sudáfrica de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, como instrumento eficaz en la lucha por lograr una Sudáfrica libre, democrática, no racista y unida. Para que el apartheid pueda ser destruido, el régimen racista debe ser aislado totalmente. Las actuales medidas restrictivas y las sanciones que se han establecido han tenido algún impacto sobre Sudáfrica, pero dado que no están bien coordinadas ni son tan amplias como deberían, el régimen racista ha podido evadir algunas de ellas. Otro aspecto de las actuales medidas fragmentarias ha sido que algunos países han podido aprovechar estas medidas restrictivas impuestas por los asociados comerciales tradicionales de Sudáfrica para ampliar su comercio con el régimen racista.

Estamos convencidos de que sólo las sanciones amplias y obligatorias resultarán en un método eficaz para ejercer presión sobre el régimen y hacerlo comprender cabalmente el rechazo de su política por la comunidad internacional, forzándolo a abandonar su política inhumana de apartheid. Al mismo tiempo, debe darse asistencia a la Sudáfrica negra y a los Estados de la línea del frente para aliviar los posibles efectos de las sanciones y hacerles posible mantener su valiente lucha contra el sistema maligno de apartheid. Malasia, por su parte, ha prometido una contribución de 2 millones de dólares en especie para el Fondo AFRICA creado por el Movimiento de los Países No Alineados a fin de brindar asistencia a los movimientos de liberación y a los Estados de la línea del frente en su causa heroica de lograr la justicia y la libertad para la mayoría de la población sudafricana. Instamos a todos los Estados Miembros a contribuir generosamente

a este Fondo para que se puedan lograr prontamente la eliminación del apartheid y el gobierno de la mayoría negra en Sudáfrica.

Para concluir, Malasia quiere reafirmar su compromiso inequívoco con la lucha de la mayoría de Sudáfrica por la eliminación total del sistema maligno de apartheid y el establecimiento del gobierno mayoritario en dicho país, donde el hombre pueda vivir en dignidad y libertad independientemente del color de su piel.

Sr. TADESSE (Etiopía) (interpretación del inglés): Como todos sabemos, la situación en Sudáfrica ha continuado deteriorándose desde el último período de sesiones de la Asamblea General. A pesar de las pretensiones en contrario, la intransigencia del régimen racista y su decisión de mantener el sistema maligno de apartheid han llegado a ser algo evidente. Es muy difícil negar hoy en día que el sistema odioso representa una afrenta para la comunidad internacional, que de manera firme y persistente lo ha condenado como un crimen de lesa humanidad. También está claro, lamentablemente, que la presión que se ha aplicado hasta ahora sobre el régimen racista ya no está en modo alguno al nivel que se necesita para obligar al régimen del apartheid a tomar en serio la indignación de la comunidad internacional.*

Los últimos cuatro decenios han sido testigos de numerosas conferencias internacionales que se han dedicado cabalmente a examinar la continuada y flagrante violación de los derechos humanos básicos y de las leyes y normas internacionales por el régimen sudafricano. Ya es hora de que toda deliberación subsiguiente sobre Sudáfrica vaya dirigida a obtener contribuciones concretas para conseguir la erradicación del sistema del apartheid y transformar a Sudáfrica en un territorio donde todos los ciudadanos vivan juntos en paz, libertad y armonía, con independencia de su color, raza o religión.

Quizá sea pertinente en esta coyuntura rechazar con indignación las frívolas disculpas que presentan los apologistas del apartheid en relación con el llamado proceso positivo de Sudáfrica. Recientemente hubo inclusive algunos que dijeron que las negociaciones en curso sobre la situación del Africa Sudoccidental tendrán una influencia directa sobre la suerte final del apartheid en Sudáfrica. Si bien

* El Presidente vuelve a ocupar la Presidencia.

reconocemos el impacto positivo de tales medidas sobre la paz y la seguridad de la región, creemos que estas son dos cuestiones separadas que no deben ser vinculadas mecánicamente y confundidas.

A pesar de los reiterados llamamientos en contrario de parte de la comunidad internacional, seguimos presenciando en Sudáfrica la intransigencia de un régimen racista que continúa de una manera sumamente ávida el sistema odioso del apartheid. Y no parece haber ningún síntoma de movimientos o de cambio de sentimientos que lleven al abandono de las prácticas racistas tan ampliamente condenadas. Por lo tanto, no debemos dejarnos engañar por todas las posturas que se han adoptado hasta ahora o las que probablemente puedan sostenerse en el futuro.

Tal como lo ha indicado claramente el informe del Comité Especial contra el Apartheid, la situación objetiva que prevalece en la región no da cabida para equívocos ni para justificaciones de complacencia. De hecho, si hay algo que revela claramente la actual situación en Sudáfrica es el continuado deterioro de la situación en ese territorio infeliz.

Persisten en una escala aún más amplia graves violaciones de los derechos humanos: siguen tras las rejas los niños que se sumaron a manifestaciones pacíficas durante boicoteos escolares; se recurre masivamente a las detenciones sin juicio en virtud de la infamante ley de emergencia de junio de 1987; se informa de un número cada vez mayor de casos de tortura indiscriminada y de actos de violencia de parte de las fuerzas de seguridad; se ha elevado el número de muertes, en circunstancias misteriosas, de los detenidos, y proliferan los secuestros y los asesinatos.

La verdad bien conocida de que la violencia engendra violencia es ya la forma de vida en esa sociedad perturbada. Debido a que el régimen racista es tan brutalmente violento, la población negra de Sudáfrica se ha visto forzada a hablar en el único idioma que el régimen racista parece entender. Por ello, los habitantes indígenas han tenido que reaccionar en la misma forma, muchas veces haciendo frente a las metralletas con palos y a los tanques con piedras. Teniendo en cuenta la decisión del pueblo de Sudáfrica, y a la luz de las lecciones de la historia, confiamos en que su lucha conduzca a la eliminación definitiva del régimen de apartheid y la creación de una sociedad multirracial y democrática en la tierra que hasta ahora ha sido de violencia racial.

La delegación de Etiopía se siente indignada ante el hecho de que se siga aplicando el apartheid a cuarenta años de la Declaración Universal de Derechos Humanos; que una ínfima minoría prevalezca por encima de una mayoría amante de la paz es realmente lamentable; que un pueblo autóctono sea tratado como ciudadano de tercera clase en la tierra que lo vio nacer no es sólo una perversión de los principios básicos de la lógica sino una afrenta a los sentimientos más elevados de la humanidad. Por lo tanto, corresponde que la comunidad internacional adopte medidas inmediatas y prácticas para poner fin a esta espectacular escalada de violación de los derechos más elementales por parte del régimen racista. De la misma manera, quisiéramos asociarnos a todos aquellos que han exhortado a la liberación incondicional e inmediata de Nelson Mandela y de los demás presos políticos de Sudáfrica. Para que todo ello sea posible, mi delegación desea subrayar la necesidad de seguir desplegando una amplia acción internacional para obligar al régimen del apartheid a cumplir con las aspiraciones de la mayoría del pueblo autóctono de Sudáfrica y con las exigencias de la comunidad internacional.

Para concluir, mi delegación expresa su constante solidaridad con los Estados de la línea del frente y vecinos, a la vez que les reitera su pedido de colaboración a fin de que sigan resistiendo la desestabilización económica y política y la agresión militar que dirige contra ellos la camarilla racista. A este respecto mi delegación desea felicitar a los países nórdicos y a otros Estados que han demostrado su voluntad de ayudar a los Estados de la línea del frente a través de medidas concretas.

Como todos sabemos, la solución duradera del problema crónico de Sudáfrica y de sus efectos devastadores en la región sólo podrá lograrse erradicando la causa de fondo: el odioso sistema de apartheid. En este sentido, reafirmamos una vez más el indeclinable apoyo del Gobierno de la República Democrática Popular de Etiopía al Congreso Nacional Africano (ANC) y a la Organización Popular del Africa Sudoccidental (SWAPO). Ante el grave peligro que plantea el sistema de apartheid para la región y para la paz y la seguridad internacionales, aprovechamos esta oportunidad para pedir al Consejo de Seguridad que imponga las ansiadas sanciones globales y obligatorias contra el régimen racista en cumplimiento de las responsabilidades que le impone el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Es deber y obligación de la comunidad internacional asistir a todas las

víctimas del racismo y desplegar esfuerzos concertados para dismantelar definitivamente el sistema de apartheid, que sigue siendo una afrenta para la humanidad. Mi país no escatimará esfuerzo alguno en lo que le corresponda para cumplir esta ardua tarea.

Sra. DIALLO (Senegal) (interpretación del francés): Las Naciones Unidas celebran este año el cuadragésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta celebración, a la vez que nos permite congratularnos por los éxitos alcanzados por nuestra Organización en la defensa y el fomento de los derechos humanos, debe obligarnos a reafirmar hoy más que nunca nuestra decisión de restaurar los derechos conculcados a millones de africanos sometidos a toda suerte de oprobios y humillaciones en su dignidad por parte del régimen de Pretoria.

La situación que sigue prevaleciendo en Sudáfrica se presenta como la violación en masa más flagrante de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

Si la palabra y la moral tuvieran fuerza destructora, no cabe duda alguna que el apartheid, tan universalmente condenado y menospreciado, habría desaparecido hace ya mucho tiempo, pero vemos que estamos frente a un sistema inmoral, inhumano, que se basa en la discriminación racial institucionalizada, con su secuela de muertes y sufrimientos, un sistema que no vacila siquiera en atacar a niños inocentes. Por otra parte, ¿no es alentador que, sumándose a las enseñanzas de otras religiones, la Iglesia Holandesa Reformada de Sudáfrica, que cuenta con el mayor número de adeptos entre los afrikaners, haya declarado, el año pasado, en un cambio de postura espectacular, que el apartheid no se encuentra justificado por la Biblia ni se conforma con los principios del cristianismo?

Al decidir el 24 de febrero de este año prohibir las actividades de un gran número de organizaciones de negros y blancos que se oponen pacíficamente al apartheid, el Gobierno de Sudáfrica confirmó que ha optado deliberadamente por la arbitrariedad y por mantenerse en contra de la corriente en favor de la paz.

Pese al estado de emergencia decretado en julio de 1985 y reafirmado desde entonces, Pretoria confiesa ser incapaz de mantener el orden y, como régimen que se hunde, se cree obligada a acallar a las víctimas inocentes de su política racista.

Pero el afianzamiento del apartheid no ha evitado que se deteriore la situación en Sudáfrica, donde los defensores de esa política multiplican las detenciones arbitrarias, los juicios inicuos, los encarcelamientos injustificados, los actos de agresión terroristas contra las organizaciones contrarias al apartheid y las ejecuciones sumarias de los combatientes por la libertad.

No cabe duda alguna de que, al intensificar la represión arbitraria en masa y las medidas de violencia contra las fuerzas opuestas al apartheid, al silenciar a la prensa, tanto nacional como internacional, el régimen minoritario racista de Sudáfrica desafía a la comunidad internacional y en especial a la autoridad y el prestigio de las Naciones Unidas.

Al actuar así, en esa forma racista y agresiva, Sudáfrica se sigue manteniendo fuera del contexto esperanzador de distensión que parece caracterizar a la situación política internacional actual. En efecto, como lo declaró el 3 de octubre pasado desde esta augusta tribuna, en el curso del debate general de la Asamblea General, el Ministro de Relaciones Exteriores del Senegal,

"... después de cuatro decenios la cuestión del apartheid se plantea siempre en los mismos términos: las aspiraciones legítimas de un pueblo son siempre sofocadas y su derecho a la libertad y a la dignidad que aún continúa confiscado." (A/43/PV.14, pág. 18-20)

La política de obcecación y desafío sistemático a la razón, al derecho y a la moral que practica el régimen de Pretoria, crea evidentemente una situación cada vez más explosiva en el Africa meridional y constituye una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales que debe merecer la atención directa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La única solución pacífica que nos parece podría evitar un caos total consiste en imponer a Sudáfrica sanciones económicas que, para ser eficaces, tienen que ser globales, concertadas y obligatorias.

El objetivo principal de tales medidas es crear condiciones de negociaciones de paz francas y leales entre las autoridades sudafricanas y los representantes legítimos de los movimientos de liberación nacional y las fuerzas patrióticas sudafricanas. Estas condiciones, recordemos, dependen de la liberación incondicional de Nelson Mandela y de todos los demás presos y detenidos políticos, entre los cuales hay mujeres y niños; dependen también de que se levante totalmente, en forma completa y efectiva, el estado de emergencia, la abolición completa de la legislación represiva contra las formaciones políticas y sociales contrarias al apartheid, así como que se anule la legislación que institucionaliza la discriminación racial.

Desde 1986, al generalizarse las medidas de restricción adoptadas por los distintos componentes de la sociedad internacional contra Sudáfrica, se ha demostrado, inclusive mediante estudios científicos y estadísticas fiables, que el único lenguaje verdadero que entienden los titulares del apartheid es el de las sanciones.

A pesar de la liberación reciente de Zephania Mothopeng y Harry Gwala, con la salud arruinada por decenas de años de encarcelamiento despiadado, es inquietante comprobar que no ha provenido del régimen racista de Pretoria ningún indicio tranquilizador. Muy por el contrario, para todos los que aún podían tener dudas sobre las intenciones del Gobierno racista de Sudáfrica, basta recordar las recientes mascaradas de elecciones municipales orquestadas por Pretoria y que nuestra Asamblea General rechazó inmediatamente en su resolución 43/13, de 26 de octubre de 1988. Basta recordar los ataques repetidos contra los Estados de la línea del frente, el aumento de la militarización de Namibia, el incremento de la represión interna y externa, todas cosas terribles que nos recuerdan la realidad inhumana del apartheid, declarado con toda razón crimen de lesa humanidad.

Si las Naciones Unidas se consideran el crisol y el reflejo de las aspiraciones de los pueblos a la justicia, la dignidad, los derechos humanos, no pueden permanecer indiferentes ante la tragedia del pueblo sudafricano.

Todas las naciones, todas las organizaciones y todas las personas amantes de la paz, la justicia y la libertad deben, individual y colectivamente, mantener o más bien acelerar las presiones concretas y eficaces a fin de dismantelar rápidamente el sistema odioso de apartheid, fuente principal de todos los males que sufre la parte meridional de nuestro continente. La Declaración aprobada por consenso en ocasión de la Conferencia Internacional sobre la difícil situación de los refugiados, repatriados y desplazados en el Africa meridional, celebrada en Oslo en agosto de este año, lo ha recordado una vez más sin equívocos.

En este cuadragésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los pueblos, las Naciones Unidas no pueden dejar de tomar la delantera en la cruzada por la paz y la justicia en Sudáfrica. Como lo declaró solemnemente nuestra Asamblea General en la mencionada resolución de 26 de octubre de 1988:

"... sólo la erradicación total del apartheid y el establecimiento de una sociedad democrática fundada en el gobierno de la mayoría, mediante el ejercicio libre y pleno del sufragio de todos los adultos en una Sudáfrica unida y no fragmentada, pueden conducir a una solución justa y duradera de la situación explosiva de Sudáfrica." (resolución 43/13, párr. 4)

Nelson Mandela, los Seis de Sharpeville, los hombres, las mujeres y los niños que mueren cada día bajo los golpes del apartheid, así como todos los demás mártires de Sudáfrica constituyen para nosotros otros tantos símbolos que nos recuerdan que el combate por la libertad y la dignidad no ha sido ganado todavía.

Ante las violaciones y los atentados graves de que son víctimas los combatientes por la libertad del Congreso Nacional Africano (ANC), del Congreso Panafricanista de Azania (PAC), de la Organización Popular del Africa Sudoccidental (SWAPO) y de los Estados de la línea del frente del Africa meridional, que padecen cotidianamente la política de agresión y desestabilización repetida del régimen de Pretoria, la comunidad internacional debe levantarse como un bloque para asumir plenamente su deber de solidaridad humana con las víctimas de la causa de la igualdad y la paz.

Esta es una oportunidad para mí de reiterar nuestro firme apoyo a la obra lúcida y dinámica que cumple el Comité Especial de las Naciones Unidas contra el Apartheid, bajo la dirección del General Joseph Garba.

A este respecto queremos dirigir un llamamiento a los Estados Miembros que todavía no lo han hecho para que ratifiquen o se adhieran a la Convención Internacional contra el Apartheid en los Deportes, que entró en vigor el 3 de abril de este año, a fin de permitir que funcione el mecanismo de supervisión previsto por este importante instrumento jurídico.

El Senegal, en lo que a él respecta, a pesar de la debilidad de sus medios, que son necesarios por otra parte para atender las exigencias de su desarrollo económico y social, no ha vacilado un solo instante en poner en práctica un programa diversificado de asistencia y solidaridad en favor de las poblaciones sudafricana y namibiana y llevar a cabo una campaña sostenida de sensibilización y movilización de la opinión pública, tanto senegalesa como internacional, sobre la realidad del apartheid y la necesidad de combatir a este sistema odioso de dominación.

La decisión que tomó nuestro país de albergar en Dakar, en julio de 1987, el encuentro histórico entre una delegación de liberales blancos sudafricanos de mayoría Afrikaner y una delegación de miembros del ANC se inscribe en este marco.

En este combate contra la injusticia, la intolerancia y la denegación de los derechos humanos, el Senegal invita a la comunidad internacional a extirpar totalmente el flagelo del apartheid a fin de que el pueblo sudafricano pueda por fin desempeñar plenamente el papel que le corresponde en el concierto de las naciones libres.

Srta. AL MULLA (Kuwait) (interpretación del inglés): La nueva atmósfera generada por el aflojamiento de la tensión entre las dos superpotencias tiene consecuencias en todo el mundo. Está en marcha la solución de los conflictos regionales, y Sudáfrica no es una excepción. Esperamos que este proceso finalice con éxito. La energía que se ha aplicado, y creemos que acertadamente, en resolver un problema de interés estratégico, debe extenderse al enclave mismo, la raíz del problema, o sea, el régimen de apartheid de Sudáfrica. No deben dejarse de lado las preocupaciones auténticas de la comunidad internacional. Deben predominar los intereses immanentes de la mayoría nacional.

La comunidad internacional es unánime en su condena del apartheid. Hay un llamamiento firme y uniforme para que se lo erradique. Debe terminar, dijo un dirigente occidental. Pero, ¿cómo? El apartheid es un objeto enfermizo, un concepto retorcido y deformado de las relaciones entre los seres humanos.

No tiene la voluntad ni la energía para irse, sino que hay que forzarlo, o al menos empujarlo a que lo haga. El apartheid ha demostrado un tremendo apetito de autosuficiencia y consigue aliento adicional desde el exterior. ¿Cómo puede erradicarse el apartheid? ¿Por la fuerza? Algunas voces que, aunque escasas, son estridentes, insisten en que no, que no puede condonarse el empleo de la fuerza. Se niega el recurso a la resistencia armada a una población que se enfrenta a una maquinaria estatal de terror y agresión. Hay que repudiar la lucha honorable contra la violencia institucionalizada, nos dicen algunos países occidentales. Pero, ¿acaso no debe la propia Sudáfrica repudiar la violencia, la agresión y el terror dentro y fuera de ese país? Que no se pida a los pueblos lo que el mecanismo del Estado no está dispuesto a cumplir. Más aún: el derecho a la defensa propia contemplado por la Carta de las Naciones Unidas, ha sido invocado a menudo por los Estados, en forma individual algunas veces, para recurrir a las armas en su propia defensa. ¿Por qué han de negar entonces este derecho al pueblo de Sudáfrica y a su movimiento de liberación nacional quienes lo ejercieron en el pasado y continúan ejerciéndolo en la actualidad?

La decisión tomada la semana pasada por los tribunales del apartheid, calificando de traición la manifestación no violenta de cuatro dirigentes del Frente Democrático Unido y de otras organizaciones en contra del sistema, es otra prueba del terror institucionalizado que aplica Sudáfrica. Los esfuerzos sistemáticos que se hacen para eliminar los cuadros del Congreso Nacional Africano de Sudáfrica (ANC) tanto en Africa como en Europa, las agresiones contra los Estados de la línea del frente y la desestabilización regional son deudas que ha de pagar el régimen racista. Sin que subestimemos la valiente lucha del pueblo y de sus movimientos de liberación nacional y la voluntad inquebrantable de los Estados de la línea del frente, hay que reconocer que sus objetivos no pueden conseguirse sin la asistencia del exterior.

En su aspecto externo, la forma más idónea de acción no violenta contra el apartheid consiste en la imposición de sanciones. Las sanciones son un complemento poderoso pero pacífico que tendría repercusiones inmediatas en contra de ese sistema aborrecible si fuera adoptado por todos los miembros de la comunidad internacional. Pero hay quienes sienten aversión por la imposición de sanciones

globales y obligatorias. Aducen que hay que mantener la comunicación con Sudáfrica para que pueda ejercerse presión sobre ese régimen. Sus argumentos se refieren a otros factores que son en sí mismos discutibles, si no rechazables.

Existe una alternativa pragmática: la imposición de sanciones selectivas y obligatorias. Ya se estableció un precedente mediante el embargo de armamentos, aunque no me referiré a su eficacia puesto que todos conocen las limitaciones que se interponen a su aplicación. Sin embargo, la comunidad internacional hizo llegar un firme mensaje a Sudáfrica mediante la aprobación de tales sanciones. Eso sucedió hace 10 años, en 1978. La comunidad internacional debiera tomar medidas adicionales que pusieran de manifiesto su voluntad política de rechazo al apartheid. Un embargo del abastecimiento y el transporte de petróleo a Sudáfrica tendría que ser el tema inmediato del programa del Consejo de Seguridad. Kuwait apoya con firmeza este camino. Debe recordarse que el Consejo de Seguridad estuvo considerando la idea en 1977 pero el proyecto de resolución presentado entonces no habría de ver la luz.

Muchos países han experimentado una larga evolución respecto a la importancia del embargo de petróleo contra Sudáfrica. Los cambios observados en la política de muchos Estados, sobre todo de Noruega y Dinamarca entre los Estados navieros, constituyen un avance positivo en la campaña mundial en esta esfera. De hecho, existe consenso entre la comunidad internacional para detener los embarques de petróleo a Sudáfrica. Nuestro mayor anhelo es que ese consenso se convierta en resolución del Consejo de Seguridad en un futuro próximo.

Existe una amplia gama de sanciones selectivas que pueden transmitir ese mensaje a Sudáfrica. El retiro de las inversiones y la proscripción de préstamos, créditos comerciales e intercambios científicos y tecnológicos son medidas que deben ser examinadas. Sudáfrica no cesará de aplicar su política si no se la obliga. El apartheid no desaparecerá a menos que la comunidad internacional unida lo haga desaparecer. Vamos a explorar todas las posibilidades de acción.

Si no se aplican sanciones obligatorias selectivas, Kuwait considera que, en su defecto, los esfuerzos concertados de la mayoría de la comunidad internacional son uno de los medios pacíficos que puede emplearse en la lucha contra el apartheid. Nuestra experiencia nos dice que esto ha demostrado ser factible. Me refiero al papel que corresponde en el embargo de petróleo al Grupo Intergubernamental encargado de vigilar el abastecimiento y el transporte de petróleo y productos derivados a Sudáfrica. Con sólo dos años de actividad

ha subrayado la importancia de la cooperación entre los Estados para la aplicación con éxito de políticas comunes. Con el mandato de la Asamblea General de verificar el abastecimiento y el transporte de petróleo y productos derivados a Sudáfrica, el Grupo demostró su valor en el proceso de robustecer el embargo de petróleo. Mediante su actividad principal de investigar las noticias de supuestos embarques de petróleo a Sudáfrica, el Grupo está coordinando los esfuerzos de los distribuidores de las empresas navieras para poner en vigor el embargo. Por su parte, Kuwait ha sostenido siempre que para ser efectivo, un embargo por parte de los países productores de petróleo tiene que contar con el apoyo de los Estados navieros y también de los distribuidores. La vigilancia de todos ellos es indispensable para el embargo. El Grupo Intergubernamental es esencial en la coordinación de tal esfuerzo. Kuwait se complace de contribuir a la labor del Grupo, que funciona bajo la hábil y prudente dirección del Sr. Vraalsen, Embajador de Noruega.

Reconocemos el papel invaluable desempeñado por el Comité Especial contra el Apartheid para movilizar a la opinión pública y promover la campaña internacional en contra del apartheid. Kuwait expresa su gratitud a su Presidente, el Embajador Garba, y a los demás miembros del Comité Especial, así como también al Secretario del Centro contra el Apartheid de la Secretaría de las Naciones Unidas, por el informe tan valioso que han presentado a la Asamblea.

Observamos con reconocimiento el contenido de la sección III, relativa a las relaciones exteriores de Sudáfrica y medidas internacionales contra el apartheid. Debe estudiarse con seriedad el inciso b) de la subsección D, que enfoca el alcance y grado de aplicación de las sanciones, puesto que arroja luz sobre diversos aspectos de las sanciones y puede proporcionar la base para desarrollar otras medidas nacionales contra el régimen de apartheid.

Además, mi delegación observa y apoya las conclusiones y las recomendaciones incluidas en la sección V del informe, sobre todo porque es un elemento positivo que se haga un examen global de los acontecimientos dentro y fuera de Sudáfrica.

Deseamos hacer los siguientes comentarios respecto al Anexo I de ese informe, relativo a las relaciones entre Sudáfrica e Israel. Su enfoque principal son las relaciones militares. Mi delegación no desea abundar en este aspecto puesto que ya habrá otros oradores que seguramente se referirán a él. Kuwait no subestima la

gravedad de la colaboración militar entre ambos regímenes pero desea llamar la atención sobre otras formas de colaboración que destacan la tendencia que siguen en sus relaciones. La información disponible indica que Israel mantiene contacto con los bantustanes, en particular con el Ciskei, y que Pretoria ha aumentado la exportación de sus productos manufacturados a Israel, los cuales son entonces reexportados a Occidente aprovechando las facilidades que otorgan los miembros de la Comunidad Económica Europea a Israel. Hay más de 250 empresas en Israel que pertenecen a la Cámara de Comercio sudafricana-israelí. Se dice que Sudáfrica ha convenido en mantener una corriente de inversiones de 100 millones de dólares por año orientada a Israel. Sudáfrica ha concedido derechos de pesca a Israel en sus aguas territoriales y le ha permitido seguir importando carbón sudafricano con créditos baratos. Todo lo anterior, y mucho más, está documentado en un informe reciente del Consejo para Namibia. La campaña contra el apartheid sólo puede robustecerse con la información, pero si bien poner las cosas al descubierto favorece la lucha contra el apartheid, no es suficiente para eliminarlo. Eso es lo menos que la comunidad internacional debe a los niños, mujeres y hombres de Africa.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

